

CONCLUSIONES

A lo largo de este informe se han presentado los resultados de la encuesta réplica de Cultura Cívica levantada en 1959 por Almond y Verba y en México replicada por el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El trabajo de Almond y Verba (1963) fue pionero y punto de partida de estudios sobre cultura política. Recordemos que la cultura política se compone de tres tipos de orientaciones políticas: cognitiva, afectiva y evaluativa, las cuales son retomadas en la estructura del informe, además de la socialización política y las percepciones e identidades partidistas. A continuación se hace un resumen del informe con algunas conclusiones de los resultados.

La dimensión cognitiva involucra los conocimientos y creencias acerca de un sistema político basados en los roles de sus aspectos políticos (*inputs*) y administrativos (*outputs*). En este sentido, las respuestas arrojaron que después de cincuenta años la transformación del país se refleja en el cambio de prioridades de los principales problemas. Por ejemplo, la inseguridad y el narcotráfico, que no eran siquiera considerados entonces. En contraste, un problema que se mantiene como nodal es el económico, pues a pesar de ser una de las economías más importantes del mundo, la brecha entre ricos y pobres ha crecido en las últimas décadas de manera alarmante (véase anexo III, p. 11).

Por otra parte, es común escuchar que los mexicanos no tienen memoria, pues suelen pasar por alto actos de corrupción que en otros países terminarían la renuncia de gobiernos enteros. Sin embargo, parece que más que olvido, los resultados indican que muchos ni siquiera se enteran, pues como se ha mencionado en este informe, únicamente poco más de la cuarta parte de la población mexicana está al pendiente de los problemas políticos y gubernamentales con frecuencia (véase anexo III, p. 13). Aunado a esto, solo discuten de política a menudo una cuarta parte de la población. Si bien el ideal de participación e interés total no se da en ninguna democracia, e incluso tal vez tampoco es deseable, los niveles de interés en la política demuestran que lejos de ir en una evolución democrática, después de los innegables pasos en las últimas décadas, estamos estancados. Lo anterior se puede explicar en cierta medida por el arraigo de la cultura autoritaria del

régimen priísta que todavía se conserva palpable en partidos y sociedad de muchas partes del país. Cuando se esperaba un cambio con la alternancia partidista a niveles locales, estatales y federal, en algunos casos sí se dio, pero en muchos otros la desilusión fue la regla. Entonces cabría preguntarse si el problema es la calidad de los partidos o de la ciudadanía.

En cuanto al seguimiento de política en medios de comunicación, la revolución tecnológica de las últimas cinco décadas cambió por completo las costumbres, pues recordemos que entonces eran amigos y conocidos en ocho de cada diez encuestados el principal medio de información política. Hoy día en la misma proporción la televisión es el medio, y ejerce un poder e influencia, que si bien no es mecánico, sí es preocupante, por los intereses que representa y el poderoso oligopolio en el que se ha convertido, en gran medida por la complicidad con los gobiernos federales (véase anexo III, p. 12). El internet, por su parte, a pesar de tener cada vez más cobertura en el país, en la encuesta se reflejó que es todavía un medio poco utilizado para recibir información política. Sin embargo, es muy probable que desde la aplicación de la encuesta hasta la fecha se haya dado un avance significativo en su alcance.

Respecto al entendimiento de los problemas del país, se ven avances, aunque tal vez no los esperados, tomando en cuenta los adelantos educativos y tecnológicos. Mientras en 1959 el 44% no entendía de estos en lo absoluto, en 2009 solamente optó por dicha opción el 12% (véase anexo III, p. 18). Sin embargo, cuando se leyó la frase “La política es muy complicada y por eso la mayoría de las personas no la entienden”, tres cuartas partes de los encuestados indicaron estar de acuerdo con esta afirmación (véase anexo III, p. 19). De esta forma, la política se percibe como algo lejano a la mayoría de las personas. Sobre conocimiento concreto de secretarios de Estado, la mitad de los encuestados no supo dar un nombre o lo dijo incorrectamente (véase anexo III, p. 87). Igualmente tuvieron problemas para mencionar a líderes de los partidos (véase anexo III, p. 67).

Aunque la encuesta no pretende fortalecer prejuicios o ideas generalizadas, frecuentemente se encontró que la educación, ingresos, número de habitantes y edad son factores determinantes en algunas preguntas. El nivel de estudios es fundamental, y se correlaciona con el interés en estar informado, con los medios que se utiliza, con el conocimiento de políticos, con el entendimiento de los problemas del país y la política. Al mismo tiempo, el nivel de ingresos es trascendental, y perfectamente explicable, pues en un país con las carencias que contamos, a mayor necesidad de trabajar más horas o tener más de un empleo, las opciones de estar menos preocupados por los asuntos públicos son un resultado esperado. Asimismo, en poblaciones con menor

cantidad de habitantes, la penetración de la tecnología es menor, pero las relaciones interpersonales son de mayor confianza, así como la participación inmediata en la mejora de su comunidad, al tener resultados más inmediatos y más duraderos de sus acciones.

En cuanto a la dimensión afectiva, es decir, la que se enfoca en los sentimientos de los ciudadanos sobre los distintos fenómenos, actores e instituciones del sistema político, la encuesta recogió el histórico sentir de desconfianza, tanto interpersonal como hacia las instituciones que hay en México. Mientras en 1959 todavía un 30% de los encuestados decía que se podía confiar en la mayoría de las personas, en 2009 solo el 14% pensó de esta manera (véase anexo III, p. 9). La confianza institucional es en general para las instituciones fundamentales muy baja, siendo los peor calificados los jueces, ministerios públicos, sindicatos, policía, diputados y partidos políticos (véase anexo III, p. 10). Es necesario recordar que a menor confianza institucional e interpersonal, los costos de todo intercambio e interacción entre ciudadanos e instituciones provoca aumento de costos económicos y de toda índole. Un ejemplo claro es el Instituto Federal Electoral y el sistema de partidos, los cuales a pesar de contar con financiamiento millonario han socavado la confianza ciudadana.

Por otro lado, las fuentes de orgullo nacional han cambiado de manera diametral desde 1959, pues entonces las dos principales fueron el sistema político y el crecimiento económico. En contraste, en 2009 se colocaron como las principales la fortaleza nacional, la independencia, el liderazgo mundial, y en segundo lugar los recursos naturales (véase anexo III, p. 39). Esto habla del claro debilitamiento del sistema político mexicano, pues entonces por sí mismo era fuente de unión y orgullo nacional; para ahora ser fuente de división y desdén.

La política mexicana se encuentra lejos de crear identidad y provocar sentimientos positivos hacia ella. Sin embargo, si se pretende consolidar un verdadero sistema democrático, además de buscar culpables en la elite gobernante, se debería observar qué se ha dejado de hacer desde la trinchera ciudadana.

Por último, en cuanto a la dimensión evaluativa, es decir, los juicios y opiniones que se toman con la información y sentimientos respecto a actores e instituciones políticas, la encuesta de Cultura Cívica arrojó resultados ambivalentes. Para seis de cada diez, el impacto de la política en la vida diaria es mucho o alguno. Sobre las leyes federales, estatales y gobiernos del Estado, en la misma proporción piensan que tienen mucho o algún impacto en la vida diaria. Es especialmente importante subrayar que en la primera encuesta, dos terceras partes consideraban que la política no tenía ningún

impacto inmediato en su vida cotidiana, lo cual refleja actualmente un acercamiento y conscientización de la importancia de la vida pública en el día a día de las personas (véase anexo III, p. 33).

Respecto a las obligaciones que tienen los ciudadanos con el país, solamente un 17% piensa que obedecer las leyes es una de ellas, lo cual explica en parte las debilidades estructurales y el escaso apego a la legalidad de las personas (véase anexo III, p. 22). En cuanto al empoderamiento ciudadano para resolver los problemas de su localidad, la primera opción para uno de cada dos es involucrarse en grupos no gubernamentales y organizaciones. Votar fue mencionado únicamente por 1% (véase anexo III, p. 21). En la práctica, siete de cada diez mexicanos no han participado nunca para influir en las decisiones de su comunidad. En cuanto a acciones concretas para tratar de influir en el gobierno, solo dos de cada diez dijeron que estarían seguros de hacer algo en caso de que alguna ley injusta o dañina fuera votada por el Congreso local. Si bien no se espera que participen todos, los que hacen algo por cambiar a su comunidad son una marcada minoría.

Los métodos que los encuestados optarían para tratar de influir en el gobierno son diversos. La opción más mencionada, por un 30%, fue formar un grupo de personas interesadas, mientras que en 1959, la primera opción era para un 27% fue trabajar a través de conexiones personales y familiares. Este cambio drástico se apega al modelo vertical y autoritario que imperaba entonces en el país, pues el tráfico de influencias, es decir, la acción y poder de otras personas, era el medio más efectivo de cambio. En contraste, ahora se observa que la acción y potencial recae, cuando menos para ese 30%, en ellos mismos. Sin embargo, algunas preguntas de la encuesta demuestran que el camino hacia una cultura política participante está lejos de cumplirse, pues cuando se leyó la frase “La gente como usted no tiene nada que decir de lo que hace el gobierno”, el 44% dijo estar de acuerdo totalmente o en parte (véase anexo III, p. 86). Es decir, de alguna manera los ciudadanos se asumen con poco margen de acción y juicio de lo que hace el gobierno.

Finalmente, respecto a las expectativas de trato por parte de la policía y la burocracia, aquellos con mayor nivel de estudios y mayor poder adquisitivo esperan en mayor medida que sean escuchados en una mayor proporción en comparación con quienes cuentan con educación elemental y se encuentran en los grupos de menor ingreso.

Respecto a los procesos de socialización política, estos mostraron ser importantes en todos sus ámbitos y etapas para comprender la conformación de la cultura política de cualquier comunidad, pues es a través de sus prácticas cotidianas como podemos comprender las virtudes y debilidades cívicas que se reproducen en la sociedad. La familia, aun por encima de

la escuela y el trabajo, demuestra tener un rol fundamental en la sociedad mexicana, que se refleja en las respuestas de la muestra.

Los procesos de socialización en el ámbito familiar presentan avances en equidad de género respecto a la toma de decisiones en conjunto y a la voz de la mujer en la casa. Mientras en 1959 únicamente el 29% dijo que tomaba las decisiones en pareja, en la encuesta de 2009, el 65% indicó que lo hace de esta manera. Los hogares donde las decisiones se enfocan más en el padre son aquellos donde la escolaridad es más baja o nula, así como en la mitad que tiene menos ingresos. Al mismo tiempo, la voz de los adolescentes era menos escuchada entonces que ahora.

Al mismo tiempo, los encuestados dijeron admirar a individuos de su propio ámbito familiar antes que a sujetos de otros (religión, deportes, espectáculos, etcétera). En la primera encuesta, resalta que los sujetos más admirados por los mexicanos provenían del ámbito político, en una tercera parte, mientras que ahora solo fueron mencionados estos en un 5%. Si bien podría relacionarse con el presidencialismo mexicano de ese entonces, también puede estar relacionado con la desafección a la política actual.

En cuanto al periodo de formación de los encuestados en el ámbito escolar, la tendencia a la participación era baja, pues únicamente el 13% expresaba sus opiniones con frecuencia (véase anexo III, p. 80), y por otro lado dos terceras partes dijeron nunca haber participado en discusiones y debates (véase anexo III, p. 80a). Los que más participaron fueron aquellos que llegaron a estudios superiores y que actualmente pertenecen a los grupos de mayores ingresos. La escuela es el espacio de formación por excelencia y de socialización más allá de la familia en los primeros años, lo cual influye en la seguridad de hacer valer derechos y voz en su etapa adulta.

En el ámbito laboral, los resultados arrojaron que la gente está dispuesta a hablar con libertad en caso de que alguna decisión afecte su trabajo o estuviera en desacuerdo en un 65%. En la práctica, los que tienen menos ingresos son los que menos se han quejado de decisiones. Los bajos salarios y la competencia han provocado que las condiciones laborales provoquen un aumento de la precariedad en perjuicio de los trabajadores.

Por otro lado, seis de cada diez encuestados dijeron que prefieren no hablar de política o limitar con quienes lo hacen. Lo que es de llamar la atención, es que la primera razón para un 30%, es porque la política no les interesa, mientras que cincuenta años atrás, con todo y la cultura política parroquial y de súbdito, solo el 14% indicó esta misma. La segunda razón fue que hablar de política puede causar problemas y alterar las relaciones personales (véase anexo III, p. 16). En otras palabras, la socialización po-

lítica es muy limitada por razones que parecen escapar de una verdadera cultura cívica.

La participación ciudadana en organizaciones de toda índole es fundamental para el dinamismo en una democracia. En México, sin embargo, los ciudadanos aún están lejos de ver en estas un medio de transformación de su realidad. Las organizaciones en las que más han participado una quinta parte son juntas de vecinos y asociación de padres de familia, las cuales son casi ineludibles para cualquiera que viva en condominios o tenga hijos en la escuela. Los que más tienden a participar son aquellos con estudios superiores o bachillerato y con poder adquisitivo superior a la media.

En suma, los procesos de socialización política no han transformado al país, pero en ocasiones ha sido más una adaptación que un avance hacia caminos más cívicos. Hay más involucramiento ciudadano; sin embargo, está lejos de verse un sentido comunitario horizontal, y permanecen aún muchos indicios de valores paternalistas y autoritarios. Los problemas se han complejizado y masificado igualmente, y los medios de comunicación masiva parecen tener demasiada influencia sobre lo que pasa en la política.

Finalmente, en cuanto a la percepción de los partidos políticos, identidad y participación política, en 2009 dos de cada diez encuestados dijeron pertenecer a algún partido político; 10% dijo pertenecer al PRI, un 3% al PAN y PRD, respectivamente (véase anexo III, p. 51). Más allá de la participación directa, el partido por el que más se inclinan los encuestados es el PRI, con un 30%, después el PAN en un 12%, y finalmente con el PRD un 8% (véase anexo III, p. 52). Los que tienen más ingresos votan más por el PAN. Los que más votan por el PRD son mayores de 45 años. Mientras el PRI tiene mayor arraigo en poblaciones menos a los 10,000 habitantes (véase anexo III, p. 56).

Respecto a las campañas electorales, únicamente dos terceras partes piensan que son necesarias, y un 22% dice que estaríamos mejor sin ellas. Únicamente una quinta parte está al pendiente de las campañas, y un 46% pone poca o ninguna atención (véase anexo III, p. 60). Uno de cada dos encuestados menciona que antes de las elecciones sabe de antemano por quién va a votar; una cuarta parte dijo tener dudas en ocasiones, y un 18% generalmente no sabe (véase anexo III, p. 57). Aunque se han dado avances en la materia desde 1959, el escaso involucramiento ciudadano en los procesos electorales demuestra todavía poco entusiasmo.

En el último año únicamente el 8% indicó haber participado en alguna reunión para discutir sobre asuntos políticos, lo cual mostró un retroceso respecto a la primera encuesta cinco décadas atrás, pues entonces cuatro de cada diez habían participado en alguna (véase anexo III, p. 107). El diálogo

y el interés por los asuntos políticos han decaído en el país de manera alarmante, lo cual es de llamar la atención, considerando que actualmente nos ufamamos de vivir en un régimen democrático.

En suma, la cultura política en México está lejos del ideal que se esperaba contar después de un largo pasado autoritario y con los avances educativos y tecnológicos. Los desafíos para la democracia en el país son constantes, y ha quedado demostrado que el paso del tiempo no necesariamente involucra una evolución en línea recta hacia una ciudadanía más efectiva y consciente de su verdadero potencial. Sin embargo, decir que todo está mal tampoco es hacer justicia a las sendas abiertas y a la constante lucha de hombres y mujeres que en todo el país han buscado condiciones de equidad electoral y social.

El compromiso cívico es una fuerza comunitaria que se refleja en la vida política de una sociedad. Este define el rol que corresponde desempeñar a los miembros de una comunidad política. Así, la ciudadanía constituye un factor para la consolidación de una democracia de calidad, en la que los ciudadanos participen en los asuntos que le competen. La democracia requiere de ciudadanos activos y participativos, los cuales participen en el diseño y aplicación de las políticas públicas y ejerzan influencia dentro de ellas.

Es decir, se requiere generar una cultura cívica donde el ciudadano y las autoridades tengan una relación de colaboración, reconocimiento y valoración de su acción. Sin embargo, en la población mexicana prevalece un clima de desconfianza en las instituciones, en las autoridades y en distintos actores políticos y sociales. A ello se suma la falta de respeto a las normas y leyes. La distancia entre los ciudadanos y las instituciones, así como su exclusión de la toma de decisiones, ha conducido en alguna medida no solo a la escasa participación en las instituciones tradicionales, sino también en las nuevas organizaciones sociales.

Asimismo, existe una demanda constante por la consolidación de un Estado de derecho, pero al mismo tiempo su realización por medio de las instituciones, valores y actores no parece gozar de fortaleza. La generación del compromiso cívico en la población tiene que ver con una cultura del derecho tanto de las autoridades como de los ciudadanos para acceder a un régimen más democrático. Ello puede contribuir al desarrollo de nuevas formas de vivir lo político más tendientes a las necesidades para consolidar no solo una democracia procedimental y liberal. En este sentido, advertimos que:

- a) Un orden político no se define solamente por las normas e instituciones políticas formales, sino que se caracteriza también por las formas

de inclusión, integración o exclusión de grupos, actores y sectores sociales; es decir, por la relación efectiva entre el poder político y la sociedad.

- b) Los procesos de consolidación de una democracia de calidad, y no solo procedimental, requieren de cambios institucionales y de las elites gobernantes, así como de la participación activa que les dé sustento. Desde esta perspectiva, el funcionamiento de toda democracia depende, al menos en parte, de la deliberación y participación ciudadana, ya que sin la expresión verbal de opiniones no pueden formarse y jerarquizarse los temas públicos ni definirse propiamente las opciones que se presentan a la sociedad.
- c) Una de las condiciones de una democracia de calidad es la consolidación del Estado de derecho, el cual tiene como condición la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial, y entraña necesariamente la protección de las libertades individuales y del derecho de asociación de parte del Estado, así como de sus fuerzas organizadas no estatales. Es decir, un Estado de derecho contempla la anulación del espacio o la opción para la arbitrariedad en las acciones de los individuos, sin importar su condición o estatus.
- d) El arribo de una democracia de calidad requiere del respeto a los derechos humanos, de mecanismos eficaces y neutros para la impartición de la justicia, así como de instrumentos eficientes para la rendición de cuentas.

A partir de lo anterior, la ciudadanía no debe ser vista solo como una condición jurídica, sino que debe apoyarse en una serie de valores que le den sustento para que la democracia se integre no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida. Capacitar al individuo para autoprotgerse del gobierno y avanzar en las libertades e intereses individuales es central, pero no es suficiente. El ciudadano ha de involucrarse en la esfera pública con conocimientos, valores y destrezas, que le permitan desarrollar un sentido de lealtad y responsabilidad hacia la comunidad a la que pertenece; es decir, requiere desarrollar el compromiso cívico que lo vincule a una comunidad social y política.